

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ANTECEDENTES

I. Solicitud de Información. El veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud que le fue asignado el folio número **80144524000456**, requiriendo diversa información referente a “gobierno de seguridad de la información o ciberseguridad”.

II. Requerimiento de información a la Dirección de Tecnologías de la Información. A través del oficio identificado con el número UT-877/2024, de fecha 22 de octubre del presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia solicitó al Director de Tecnologías de la Información diera respuesta, sobre los planteamientos requeridos y en su caso, indicara si la información requerida encuadraba en alguna de las hipótesis establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua para ser considerada como reservada, confidencial o inexistente.

III. Respuesta al requerimiento. En atención a lo anterior, el Director de Tecnologías de la Información, Ing. Nahim Josafat Ponce Lucero, solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a la petición en cuestión, esto es, el cuatro del presente mes y año, autorizada mediante Acuerdo CT/UT/PJECH/AT/76-2024.

Posteriormente la Dirección de Tecnologías de la Información, con fecha 8 de noviembre envió el oficio identificado con el número DTI-279-bis/2024 y se recibió en esta Unidad de Transparencia el 11 del presente mes y año, en el que indicó que tras un análisis de cada cuestionamiento no es posible proporcionar la misma respecto a las preguntas identificadas con el número 1 a la 22, de la 24 a la 31, y de la 34 a la 53, en virtud de que el artículo 124 en su fracción IV que se refiere al riesgo a la vida, **seguridad** y salud, describiendo que **“se revelaría información sobre roles, horarios, funciones laborales y áreas de trabajo que facilitan a criminales el diseño e implementación de ataques de ingeniería social, robo de identidad o daño a la reputación de empleados e institución. La divulgación de dicha información podría exponer a las personas a situaciones de vulnerabilidad que comprometan su integridad física o emocional”**.

Por lo que se refiere a la fracción VI, menciona que **“su divulgación podría terminar en manos de individuos con intenciones criminales que la usen para crear ataques cibernéticos o diseñar fugas de la información mismas que podrían obstruir los esfuerzos de las autoridades para prevenir o efectuar la persecución seguir delitos en curso, afectando la capacidad de investigación y sanción efectiva de conductas delictivas. Mantener esta información bajo reserva es fundamental para no comprometer la estrategia de prevención o investigación de dichos delitos”**.

Y por último, menciona que en cuanto a la fracción IX, que se refiere a Expediente Judicial o Administrativos en Trámite, **“está directamente vinculada con expedientes judicial o administrativos que aún no han causado estado. De acuerdo con la legislación aplicable, es imperativo mantener la confidencialidad de estos expedientes para garantizar un debido proceso,**

proteger la imparcialidad de las resoluciones y evitar que la divulgación temprana de la información afecte negativamente el desarrollo de los procedimientos"; es por ello que el Director de Tecnologías de la Información clasifica la información como RESERVADA ***“por el plazo máximo de ley y/o hasta que desaparezcan las condiciones que justifican esta solicitud”***.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. Este Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer y resolver sobre los procedimientos de clasificación de información; ello, de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 36, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información

De conformidad con lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, sólo en los casos previstos en la ley, se limitará el acceso a la información pública.

II. Análisis de fondo. Del análisis de la clasificación de información realizada por el Ing. Nahim Josafat Ponce Lucero, Director de Tecnologías de la Información, la materia de estudio se constriñe a confirmar o no la clasificación como información reservada de las preguntas de la número 1 a la 22, de la 24 a la 31, y de la 34 a la 53, requerida en los términos de lo establecido en el artículo 36 fracciones III, VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Ahora bien:

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, podrá clasificarse como información reservada, para lo que interesa, aquella cuya publicación:

Fracción IV. La publicación de la información solicitada podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

Fracción VI. La divulgación de la información podría obstruir la prevención o persecución de los delitos.

Fracción IX. La divulgación de la información vulnera la formación y trámite de expedientes judiciales o administrativos en tanto no haya causado estado.

2.- En términos de lo establecido en el artículo vigésimo noveno y trigésimo de los “Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”, señala que de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que al divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse:

a.- La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

b.- Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;

c.- Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y;

d.- Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

En el caso concreto, la Dirección de Tecnologías de la Información, reserva la información de los cuestionamientos marcados de la pregunta número 1 a la 22, de la 24 a la 31, y de la 34 a la 53, actualizado la fracción IV, VI y IX del Artículo 124 a Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública; ya que como según lo expone en su oficio, descrito anteriormente.

III. Análisis específico de la prueba de daño. En ese sentido se considera, que, si bien es cierto que la regla de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información no es absoluta, existen excepciones tratándose del interés público o general, porque, como se mencionó anteriormente, se enumeran los supuestos a través de los cuales los sujetos obligados podrán clasificar aquella información como reservada, misma que se podrá sustraer por un tiempo determinado.

Es evidente que este acuerdo de reserva pretende brindar seguridad a los sistemas informáticos digitales, tomando en cuenta que este conjunto de políticas, procedimientos, estrategias y herramientas son encargadas de proteger la infraestructura informática de este ente público, desde su información de ciberataques y otros riesgos, que al revelarse se puede poner en peligro la confidencialidad, disponibilidad e integridad de dicha información.

En este contexto, la Seguridad de la Información y de sus sistemas de gestión procura al máximo los niveles de confidencialidad, integridad y disposición de la información generada, recibida, procesada, almacenada y compartida por las instituciones gubernamentales.

Por lo tanto, este Comité estima que la clasificación antes mencionada, deberá de ajustarse conforme a lo establecido en los artículos 111 y 112 de la ley local en la materia, esto a través de un análisis casuístico.

En ese orden de ideas, se determina confirmar la reserva hecha por la Dirección de Tecnologías de la Información por cinco años y, en su caso una vez que concluya dicho plazo, se exigirá de una valoración particular por este Comité de Transparencia, por ello, concluye que la información solicitada y una vez que concluya la reserva en los términos del segundo párrafo del artículo 113 de la ley local de la materia, se determina que la misma deberá ser analizada a través de una valoración particular que dieron origen a la presenta clasificación.

Por lo expuesto y fundamentado se:

RESUELVE:

ÚNICO: Se confirma la clasificación de información reservada determinada por la Dirección de Tecnologías de la Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, hasta por cinco años.

Notifíquese e instrúyase a la Unidad de Transparencia para que de inmediato dé cumplimiento a esta determinación y se notifique al solicitante.

Así, por unanimidad, lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, integrado por la licenciada Ana Gabriela Holguín Castruita, el licenciado Paul Daniel Moriel Quiralte y el licenciado Julio César Santa Cruz Favela



LICENCIADA ANA GABRIELA HOLGUÍN CASTRUITA
PRESIDENTA DEL COMITÉ



LICENCIADO JULIO CÉSAR SANTACRUZ FAVELA
SECRETARIO DEL COMITÉ



LICENCIADO PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE
VOCAL DEL COMITÉ